



**Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial**

Buenos Aires, 5 de marzo de 2018

RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 8 /2018

VISTO:

El Expediente DCC N° 209/14-0 s/ Mantenimiento de Redes de Incendio y Sistemas de Detección Temprana de Incendio y Actuación N° 30.043/17; y

CONSIDERANDO:

Que por Res. OAyF N° 13/2015 se aprobó el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 25/2014 para la inspección, puesta a punto, certificación y mantenimiento de los sistemas de redes de incendio y sistemas de detección temprana de incendios de los edificios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitios en Tacuarí 138, Roque Sáenz Peña 636, Beruti 3345, Libertad 1042, Hipólito Yrigoyen 932, Beazley 3860, Av. Julio A. Roca 516 y Bolívar 177, conforme las condiciones prevista en la Res. OAyF N° 348/2014, adjudicando - el renglón 1 de la licitación a Dakari Group SRL -Dakari por la suma de Pesos Dos Millones Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Noventa y Nueve con 36/100 (\$2.191.599,36).

Que la respectiva orden de compra nro. 777, fue retirada por la adjudicataria el 15/01/2015, dando comienzo al vínculo contractual a partir del día 1/02/15.

Que por Actuación N° 30043/17 Dakari presentó la factura nro. 0003-00000168 (fs. 2) por la suma de Pesos Noventa y Un Mil Trescientos Dieciséis con 64/100 (\$91.316,64), por el servicio prestado durante noviembre del año en curso.

Que, a fs. 3, la Dirección de Seguridad tomó conocimiento de las peticiones realizadas a fs. 1/2 , e informó que *"a pesar de que las cuotas bajo las cuales tramitó la contratación se encuentran cubiertas (24/24 cuotas mensuales), la empresa continuó prestando servicio hasta tanto se lleve a cabo una nueva contratación, solicitando hasta tal momento, que se gestionen las vías administrativas para dar curso a la presente del modo que considere más idóneo"*, y que mediante nota DS N° 032/2018 (fs. 12) rectificó *"...lo consignado en Nota DS N° 601/2017, en donde por un error involuntario se consignó el pago de la Factura n° 0003-00000168, de parte de la empresa CASSI DAKARI GROUP por el período de "Octubre" cuando en realidad debió ser "Noviembre", por cuanto entonces solicito tenga a bien disponer su trámite en tal sentido y a sus efectos..."*.



**Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial**

Que la Dirección General de Obras, Servicios Generales y Seguridad solicitó a fs. 5 remitir la actuación de referencia a esta Comisión *“a fin de que dé el trámite que usted estime corresponda a la luz de lo resuelto en los casos análogos de la misma Empresa por Res. CAGyMJ N° 100/2017 bis”*.

Que la Oficina de Administración y Financiera remitió todo lo actuado a esta Comisión, sin realizar observaciones al respecto (fs. 7).

Que a fs. 14 intervino la Dirección General de Programación y Administración Contable indicando que los importes facturados por Dakari se corresponde con la contratación de expediente DCC N° 209/14-0 s/ Mantenimiento de Redes de Incendio y Sistemas de Detección Temprana de Incendio e informó que *“...en el mes de enero del año próximo pasado ha operado el vencimiento del expediente detallado up supra, y que el importe de la factura se corresponde con el de la citada contratación...”* por lo cual se remitió en caso de corresponder para su legítimo abono.

Que a fs. 20/21 mediante el dictamen 8106/2017, el servicio de asesoramiento jurídico permanente dictaminó que *“Teniendo en cuenta las constancias de las presentes actuaciones y los informes producidos por las áreas técnicas pertinentes, así como la jurisprudencia y doctrina citadas, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos entiende que corresponde abonarle a la nombrada empresa, por legítimo abono, el importe de la factura impaga”*.

Que en tal estado llega la cuestión a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que implicando la cuestión en debate un acto de disposición de recursos presupuestarios este órgano resulta competente.

Que conforme los términos del Expediente DCC. N° 209/14-0, la contratación con Dakari Group SRL se encuentra vencida. No obstante ello, la adjudicataria continuó prestando servicios, según surge de la conformidad prestada por la Dirección de Seguridad a fs. 3.



**Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial**

Que atento lo manifestado por el área contable a fs. 14 lo facturado se ajusta a lo contratado en el expediente mencionado.

Que el servicio de detección de incendio resulta esencial para garantizar la seguridad de los bienes y personas del Poder Judicial, y para asegurar su prestación es conveniente abonar la factura referida precedentemente.

Que en tal sentido, la Procuración del Tesoro de la Nación, tiene dicho sobre situaciones similares que: *"Sobre esa base cabe concluir que se habría producido un enriquecimiento sin causa de la Administración al haber recibido un servicio útil sin contraprestación alguna y un correlativo empobrecimiento de la firma reclamante motivado precisamente por la falta de contraprestación...En tal situación observo que se encontrarían reunidos los requisitos que doctrinal y jurisprudencialmente se exigen para la procedencia de la acción in rem verso: enriquecimiento de una parte, empobrecimiento de la otra, relación causal entre ambas, ausencia de causa justificante (relación contractual o hecho ilícito, delito o cuasidelito, que legitime la adquisición) y carencia de otra acción útil – nacida de un contrato o de una ley – para remediar el perjuicio"* (Dictamen N° 89 del 18/4/02). Por otra parte, Miguel Ángel Ale, en su "Manual de Contabilidad Gubernamental", Ed. Macchi, pág. 143: *"Suele darse en la práctica administrativa la existencia de obligaciones que no emergen de una fuente contractualmente válida, sino de la ejecución de un trabajo, obra o servicio encomendado y entregado... en materia de actos unilaterales, y con mayor razón debe serlo en materia de actos contractuales, en los cuales, una vez cumplido el contrato, la anulación sería inútil y no podría, en modo alguno, extinguir la obligación que emerge, no ya del contrato mismo - como ya manifestáramos-, sino de la ejecución del trabajo, obra o servicio encomendado y entregado. Ante tales situaciones rige el principio del pago de lo debido, del empleo útil o, más específicamente, el del enriquecimiento sin causa como fuente de la obligación de pagar, independientemente de que exista, o no, una fuente contractual válida"* (C.S.J.N, Fallos, T° 251, pág. 150 y T° 262, pág. 261).

Que por lo expuesto, y en concordancia al dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, están dadas las condiciones de excepción que justifican el pago por el régimen de legítimo abono, esto es, el vencimiento del contrato, la efectiva prestación del servicio y la obtención de un beneficio sin contraprestación alguna por parte del Consejo.

Que existiendo fondos presupuestarios suficientes, corresponde autorizar los pagos pretendidos por Dakari.



**Comisión de Administración,
Gestión y Modernización Judicial**

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890;

**LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN
Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL
RESUELVE:**

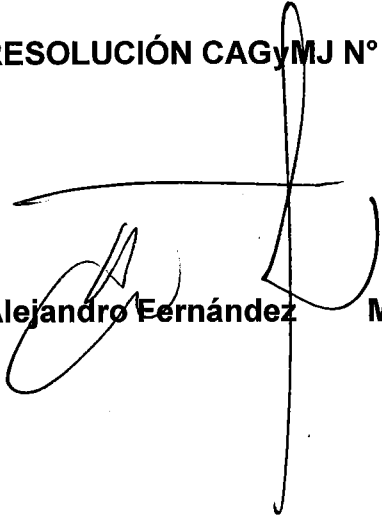
Artículo 1º: Autorizar el pago a Dakari Group SRL, mediante el régimen de legítimo abono de la factura 0003-00000168 por la suma de Pesos Noventa y Un Mil Trescientos Dieciséis con 64/100 (\$91.316,64), por el servicio de mantenimiento de redes de incendio y sistemas de redes, durante el mes de noviembre de 2017.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección General de Compras y Contrataciones a notificar a Dakari Group SRL, la presente resolución.

Artículo 3º: Instruir a la Dirección General de Programación y Administración Contable a realizar las afectaciones presupuestarias pertinentes.

Artículo 4º: Regístrese, anúnciense en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar; notifíquese a Dakari Group SRL, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Programación y Administración Contable, y oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 8 /2018


Alejandro Fernández


Marcelo Vázquez


Juan Pablo Godoy Vélez